

**REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



SALA LABORAL

Acta 25522

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad Pública, en el proceso ordinario laboral promovido por **JUANA PASTORA DAVILA HURTADO** contra **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

Solicita la demandante que se declare que le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente de del pensionado Humberto Antonio Muñoz González, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

Hechos

Como sustento de lo pretendido indica que, el señor Humberto Antonio Muñoz González era pensionado por Colpensiones y falleció el 17 de junio de 2017.

Era la compañera permanente del causante desde el 12 de enero de 2012, con quien convivió bajo el mismo techo y era el señor Muñoz González quien veía por los gastos del hogar.

Reclamó ante la entidad la prestación el 1º de agosto de 2018 y a la fecha no ha sido resuelta.

Contestación Colpensiones

Entidad a través de apoderada indicó que es cierto que el causante era pensionado de esa entidad, por medio de la Resolución 06780 del 21 de abril de 2005.

En cuanto a la convivencia entre la pareja, no le consta y debe probarse en el proceso.

En lo relacionado a la reclamación, es cierto que la actora solicitó pensión de sobrevivientes, pero mediante comunicado el 9 de agosto de 2018, se informó que unos documentos no estaban completos, por tanto, sí se le brindó respuesta.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: Inexistencia de la obligación de reconocer pensión de sobrevivientes, pago de retroactivo, intereses moratorios y costas del proceso, imposibilidad de condena en costas y buena fe.

Sentencia de primera instancia

El Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **1° de diciembre de 2020**, Absolvió de las pretensiones de la demanda, toda vez que la actora no probó la convivencia con el causante por el termino de 5 años anteriores a su muerte. Además, condenó en costas a demandante.

Esta decisión fue objeto de recurso el cual fue sustentado en fecha 02 de septiembre de 2022 por orden del Tribunal, toda vez que el Juez no lo había recibido en la audiencia donde dictó la sentencia.

Recurso parte actora.

El apoderado de la actora manifiesta que el causante era pensionado y falleció el 17 de junio de 2017.

Argumenta que dentro del proceso sí se acreditó la convivencia de 5 años con el causante y la demandante, la cual comenzó el año 2012 y hasta la muerte del compañero.

Existen declaraciones extra proceso sobre la convivencia y era suficiente sumado al interrogatorio.

En la providencia el Juez no valoró bien la prueba de la convivencia y por eso negó la prestación, en razón a ello debe revocarse la sentencia y condenarse a las pretensiones de la demanda.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado consagrado de la ley 2213 de junio de 2022, Colpesniones manifestó:

Tal como lo advierte el juez de primera instancia, para el caso, la parte demandante no logró demostrar que fuera la compañera permanente del causante, dado que no se cumplió el requisito de 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante; se puede notar que ni siquiera fue allegado al proceso las pruebas necesarias, pues, aunque en la demanda se enunciaron algunas personas para declarar testimonio, la prueba no fue practicada debido a que la parte demandante no pudo llevar al proceso los testigos, quedando reducido el debate probatorio casi que únicamente al interrogatorio, en el cual es fácil que la demandante pueda favorecerse a sí misma con su propio dicho y sin embargo, aun así se presentan inconsistencias en lo declarado, que permiten concluir que en efecto, no se presentaron los requisitos necesarios para que se configurara una relación de convivencia con vocación de permanencia, ni los extremos temporales de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de Ley 100 de 1993, es claro que lo que se le exige a la demandante es demostrar la convivencia, como mínimo durante los cinco años inmediatamente anteriores a la muerte del afiliado o pensionado, convivencia en la que mantuvieran lazos como pareja y grupo familiar, que se presentara una unión con vocación de permanencia y que se hubiera prolongado como mínimo durante cinco años y dichos requisitos deberán ser probados, por la demandante durante el proceso dado que las declaraciones extraprocesales no son suficientes para concluir que entre la demandante y el causante existió una convivencia de 5 años o más.

Adicionalmente, en la reciente sentencia SU-149 de 2021 la Corte Constitucional ratificó cuál es la correcta intelección constitucional de la citada norma, confirmando que para ostentar la calidad de beneficiario se debe acreditar un mínimo de cinco años de convivencia, ya sea en calidad de cónyuge o compañero (a) permanente. Así las cosas, se solicita que en segunda instancia confirme la sentencia de primera y absuelva a la entidad que represento, pues es claro que la demandante no cumple los requisitos que la ley le exige para acceder a la pensión de sobrevivientes, dado que no acredita la convivencia y calidad de compañera permanente del causante.

Problema jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso de apelación, será: Establecer si la demandante acreditó el requisito mínimo de convivencia con el señor Humberto Antonio Muñoz González, para acceder a la pensión de sobrevivientes solicitada.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver considera importante la Sala hacer las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. El señor **Humberto Antonio Muñoz González**, falleció el **17 de junio de 2017**, según copia del registro de defunción aportado.
2. El causante era pensionado por la entidad demandada mediante Resolución 06780 del 21 de abril de 2005.
3. La actora reclamó el 1º de agosto de 2018 pensión de sobrevivientes.
4. La demandante no arrió prueba testimonial al proceso.

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

En los términos del artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 1757 del Código Civil, corresponde a las partes acreditar los supuestos de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman; el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

A su vez, el Artículo 60 del C. de P. del T y de la Seguridad Social establece:

“El Juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”

Y el Artículo 61 del mismo estatuto procesal, reza:

“Libre formación del convencimiento. El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.”

De la convivencia entre compañeros permanentes para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes generada por la muerte del pensionado de 5 años anteriores a la muerte.

En el caso que ocupa la atención de la Sala no hay discusión en cuanto que el señor Humberto Antonio Muñoz González fue pensionado por Colpensiones desde 2005.

Con relación a la convivencia entre compañeros permanentes para solicitar la pensión de sobrevivientes establece el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que esta deberá extenderse por lo menos durante los últimos 5 años anteriores a la muerte del causante, condición que ha sido reiterada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, siendo un ejemplo de esta las sentencias SL1029-2019 y SL347-2019.

A partir de lo anterior era carga de la demandante demostrar que por lo menos durante los 5 años anteriores al **17 de junio de 2017**, cuando falleció el causante hizo vida marital con aquel.

Con el fin demostrar estas circunstancias en el proceso únicamente se aportó unas declaraciones extra proceso y el interrogatorio de parte a la demandante.

Una vez analizada la prueba en su conjunto, encuentra la Sala que la actora no probó la convención de 5 años anteriores a la muerte del causante, toda vez que el interrogatorio por sí solo no es prueba de la convivencia entre la pareja, y en lo relacionado a la prueba testimonial no se aportó, además se habían llamado a los testigos que rindieron la declaración extra proceso para que ratificaran los mismos, sin que se hicieran presentes, aduciendo la parte demandante que unos no fueron encontrados y otros vivían en Estados Unidos, por lo que no podían comparecer.

Es decir, que tal como lo manifestó el Juez de instancia en el proceso la parte actora no cumplió la carga probatoria que era su deber, sin que existan elementos que al ser valorados en conjunto indiquen que existió esa convivencia que predica la actora y en gracia de discusión el interrogatorio tampoco aportó mayor convencimiento dadas las contradicciones en que incurrió la actora que por el contrario desdican de esa convivencia.

Sobre la necesidad de probar la convivencia la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de julio de 2021 MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalve SC2976-2021 Radicación N.º 25269-31-84-002-2013-00036-01 dijo:

Esto debido a que las probanzas están ayunas de datos o información que permitan demostrar que cada uno de los integrantes dispuso «de sus vidas para compartir asuntos fundamentales de su ser, coincidiendo en metas, presentes y futuras, y brindándose respeto, socorro y ayuda mutua» (SC1656, 18 may. 2018, rad. n.º 2012-00274-01).

Por tanto, ante la parvedad de su contenido, mal podría extraerse de ellos un error protuberante en su valoración por parte del Tribunal, lo que cierra la prosperidad de la casación.

Por último, se remarca que, en la sentencia confutada, lejos de alzarse una tarifa probatoria que sirviera para cercenar la capacidad demostrativa de las pruebas, se hicieron algunas reflexiones que encuentran asidero en el sistema de valoración probatoria acogido en nuestro sistema jurídico.

El ad quem en verdad aseguró que para probar «que hubo de verdad convivencia entre el presbítero H..... L..... y el actor... la única forma de proceder a su declaración es contando con pruebas macizas que así lo acrediten» (negrilla fuera de texto, folio 22 del cuaderno 10); sin embargo, por esta afirmación no se estableció una regla de exclusión probatoria, como se alega en el segundo embiste casacional, sino que se limitó a reiterar lo dispuesto en el anterior artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, según el cual «[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

Por tanto, para poder acceder a las pretensiones enarboladas por el promotor, resultaba indispensable que al proceso se alleguen todas las pruebas que permitieran la Radicación n.º 25269-31-84-002-2013-00036-01 44 demostración de los supuestos fácticos de la reclamación, sin que la reiteración de este mandato constituya una infracción por error de derecho.

Esto debido a que, la consolidación de un proyecto común, normalmente transita por la cohabitación, que se hace visible en planes y propósitos que son fijados de consuno y revelados a familiares y amigos cercanos, sin que los mismos atenten contra las convicciones profundas de los integrantes; por lo tanto, con estas premisas en contra de las pretensiones iniciales, que encuentran soporte en la cotidianidad, ciertamente el convocante debió esforzarse porque los medios demostrativos que aportó fueran concluyentes respecto a la decisión de formar una familia.

En el anterior entendido encuentra la Sala que fue acertado el razonamiento probatorio expuesto por el a-quo, por lo que se **Confirmará** el fallo apelado en este aspecto.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de la actora, agencias en derecho se estiman en la suma de \$1.000.000. a favor de la demandada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por el Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el día **01 de diciembre de 2020**, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **JUANA PASTORA DAVILA HURTADO** contra **COLPENSIONES**.

Costas en esta instancia a cargo de la actora, agencias en derecho se estiman en la suma de \$1.000.000. a favor de la demandada.

Las anteriores decisiones se notifican en **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS

Radicado 05001-31-05-016-2019-00242-03
Radicado Interno P25522
Asunto: Confirma sentencia


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ


GUILLERMO CARDONA MARTINEZ

Radicado 05001-31-05-016-2019-00242-03
Radicado Interno P25522
Asunto: Confirma sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Juana Pastora Davila Hurtado
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05001-31-05-016-2019-00242-01
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 1 de noviembre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 1 de noviembre de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO